



**T. S. J. CAST. LA MANCHA SALA SOCIAL
ALBACETE**

SENTENCIA: 00937/2015

Francisco Ponce Rial
Francisco Ponce Rial
PROCURADORES
ALBACETE

C/ SAN AGUSTIN Nº 1 (PALACIO DE JUSTICIA) - 02071 ALBACETE
Tfno: 967 596 714
Fax: 967 596 569
NIG: 02003 34 4 2015 0105589
402250

RSU RECURSO SUPPLICACION 0000581 /2015

Procedimiento origen: DEMANDA 0000152 /2014
Sobre: DESPIDO DISCIPLINARIO

RECURRENTE/S D/ª: AYUNTAMIENTO DE CUENCA AYUNTAMIENTO DE CUENCA
ABOGADO/A:
PROCURADOR:
GRUADO/A SOCIAL:

RECURRIDO/S D/ª:
ABOGADO/A:
PROCURADOR:
GRUADO/A SOCIAL:

Magistrado/a Ponente: Ilmo. Sr. D. JESUS RENTERO JOVER

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS/AS

D. PEDRO LIBRAN SAINZ DE BARANDA
D. JESUS RENTERO JOVER
D. JESUS MARTINEZ ALMAZAN
D^a. MARIA DEL CARMEN PIQUERAS PIQUERAS

En Albacete, a dieciseis de septiembre de dos mil quince.

Vistas las presentes actuaciones por la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, compuesta por los/las Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as anteriormente citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S. M. EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

- SENTENCIA Nº 937 -

en el RECURSO DE SUPPLICACION número 581/2015, sobre DESPIDO, formalizado por la representación del AYUNTAMIENTO DE CUENCA contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Cuenca en los autos número 152/2014, siendo recurrido/s ; y en el que ha actuado como Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JESUS RENTERO JOVER, deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que con fecha 22 de enero de 2015 se dictó Sentencia por el Juzgado de lo Social número 1 de Cuenca en los autos número 152/2014, cuya parte dispositiva establece:

«Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por _____ asistida por el Letrado _____ contra el Ayuntamiento de Cuenca, representado por la Procuradora _____ y asistido por el Letrado _____ ; y, en consecuencia, debo declarar y declaro **IMPROCEDENTE** la decisión de extinción del contrato de trabajo indefinido que vinculaba a ambas partes, efectiva el día 31-12-13, condenando al Ayuntamiento de Cuenca a OPTAR en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, entre la readmisión del trabajador con abono de los salarios de tramitación, esto es, los dejados de percibir desde la fecha de la decisión extintiva hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 91,75 euros al día, o el abono de una indemnización por importe de 31.378,5 euros, con los intereses del art. 576 LEC y sin costas.»

SEGUNDO.- Que en dicha Sentencia se establecen los siguientes Hechos Probados:

«**PRIMERO.-** La trabajadora demandante _____, ha venido prestando servicios como trabajadora social para el Ayuntamiento de Cuenca, con una antigüedad de 5-6-06, fecha de celebración de su primer contrato, temporal de obra o servicio, consistente en "PLAN LOCAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES GENERALES - 2006", el cual fue prorrogado con fecha 20-12-06 hasta el 31-12-07, el 10-12-07 hasta el 31-12-09 y el 28-12-09 hasta el 30-6-10, fecha ésta última en que se extinguió, causando la demandante baja en la Seguridad Social, en la que fue dada de alta en virtud de nuevo contrato de fecha 5-7-10, temporal, de obra o servicio consistente en "PLAN LOCAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL EJERCICIOS 2010 2013", con duración hasta el 31-12-13, recogiendo como cláusula adicional que "EL PRESENTE CONTRATO ESTÁ SUJETO AL "PLAN ...", DE SUSPENDERSE DICHO CONVENIO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES ..., SUPONDRÍA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO", en todo caso con jornada de trabajo ordinaria o completa de 35 horas semanales repartidas de lunes a viernes, y

un salario bruto mensual de 2.790,92 euros, 91,75 euros diarios, incluida prorratea de pagas extra.

SEGUNDO.- Mediante carta de fecha 27-11-13 el Ayuntamiento demandado, a través del concejal delegado de personal, comunica a la demandante que "... el próximo día 31 de diciembre de 2013 finaliza el contrato suscrito por Vd. con este Ayuntamiento, por lo que el referido día, a la terminación de su jornada laboral, dejará de prestar sus servicios en el mismo."

TERCERO.- No consta que se haya ofrecido al trabajador demandante indemnización alguna a raíz de la decisión adoptada por el Ayuntamiento demandado de dar por finalizada su relación laboral.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Cuenca cuenta con un "III PLAN LOCAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE CUENCA 2014-2015", con una aportación estimada de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de 300.000 euros, considerándose necesaria la cobertura de una plaza de trabajador social en el Área de Intervención Social, con cargo al referido Plan.

QUINTO.- La trabajadora demandante no ostentaba la condición de representante legal de los trabajadores ni en el momento del despido ni en el año anterior al mismo.

SEXTO.- Con fecha 10-1-14 la trabajadora demandante presentó reclamación administrativa previa ante el Ayuntamiento demandado, la cual no consta que haya sido resuelta expresamente.»

TERCERO.- Que contra dicha Sentencia se formalizó Recurso de Suplicación, en tiempo y forma, por la representación del AYUNTAMIENTO DE CUENCA, el cual fue impugnado de contrario, elevándose los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, en la que, una vez tuvieron entrada, se dictaron las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma; poniéndose en su momento a disposición del/de la Magistrado/a Ponente para su examen y resolución.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Contra la Sentencia del Juzgado de lo Social de Cuenca de fecha 22-1-15, recaída en los autos 152/14, dictada resolviendo de modo estimatorio la demanda sobre Despido interpuesta por la trabajadora contra la empleadora pública EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA, se formaliza el presente recurso de Suplicación por dicha

empleadora mediante dos motivos, que con respecto a su contenido probatorio, están ambos dedicados al examen del derecho aplicado, mediante los que se realiza denuncia de infracción de lo que viene establecido en los artículos 15,1 y 15,5, así como del 53, todos ellos del Estatuto de los Trabajadores. Lo que resulta impugnado de contrario por la representación letrada de la demandante, quien esgrime además, al amparo del artículo 197 LRJS, una añadida motivación que avala la improcedencia del despido.

SEGUNDO.- Antes de entrar a dar respuesta a los motivos del recurso formalizado por la empleadora recurrente, entiende esta Sala que procede resaltar, de los incombatisos aspectos fácticos de la Sentencia de instancia, y de lo actuado, lo siguiente:

a) La trabajadora demandante suscribió un primer contrato de trabajo como Trabajadora Social con la empleadora local demandada el 5-6-2006, para obra o servicio determinado consistente en "Plan Local de Integración de los Servicios Sociales Generales-2006", que fue prorrogado en 20-12-2006 por la empleadora hasta el 31-12-2007 (hecho probado primero).

b) Con fecha 10-12-2007, sin que conste solución de continuidad, se suscribió por las partes nueva prórroga del contrato temporal, hasta el 31-12-2009, y el 28-12-2009 hasta el 30-6-2010, fecha en la que se extinguió la relación laboral y se cursó baja en Seguridad Social (mismo hecho probado primero), lo que supone un total de 4 años y 25 días desde el inicio de la vinculación.

c) En fecha 5-7-2010 se suscribió nuevo contrato temporal, para obra o servicio determinado, consistente en "Plan Local de Integración Social Ejercicios 2010-2013", con duración hasta 31-12-2013, lo que supone otros tres años, 5 meses y 26 días (hecho probado primero)

d) Los servicios prestados por la trabajadora demandante para la empleadora demandada lo han sido siempre como Trabajadora Social (hecho no debatido).

e) El Ayuntamiento demandado cuenta con un llamado "III Plan Local de Integración Social de Cuenca 2014-2015" (hecho probado cuarto), con una aportación de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de 300.000 euros, considerándose necesaria la cobertura de una plaza de Trabajador Social en el Área de Intervención Social, con cargo al referido Plan (hecho probado cuarto).

f) Mediante carta de fecha 27-11-2013 la entidad recurrente comunica la extinción del contrato de trabajo a partir del día 31-12-2013 (hecho probado segundo).

g) La trabajadora presentó reclamación previa, sin que recayera resolución (hecho probado sexto), y posterior demanda por despido, recayendo Sentencia que la estimó en su integridad y declaró la Improcedencia del despido, por considerar que los contratos sucesivos fueron suscritos en fraude de ley, al no tener como objeto obras o servicios con sustantividad propia, habiendo excedido en todo caso de los

tres años los dos suscritos, tanto el primero con sus prórrogas, como el segundo.

h) La declaración de improcedencia lo es con las consecuencias derivadas de la consideración de existencia de una relación laboral indefinida, en los términos en que así se entiende en el empleo público laboral. Es contra dicha decisión que se interpone el presente recurso por la empleadora pública demandada.

TERCERO.- En el primer motivo del recurso se cuestiona por la representación de la empleadora pública demandada la argumentación de la Sentencia referida a la limitación temporal de tres años -con una cierta confusión de redacción o conceptual, se refiere a que pretende la "revisión del fundamento jurídico segundo" de la sentencia- del artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores, que establece una limitación temporal para los contratos para obra o servicio determinado, por considerar que la redacción vigente del precepto, en cuanto que deriva del RDL 10/2010, entró en vigor el 17-6-2010, así como cuestiona la aplicación al caso del artículo 15.5 del mismo precepto, por haberse introducido la redacción de dicho apartado mediante RDL 5/2006, con vigencia desde el siguiente día de su publicación en el BOE, es decir, desde el 15-6-2006 (al publicarse en el del día 14). Pues bien, esa nueva redacción del artículo 15,5 E establecía lo siguiente en su primer momento:

"5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos.

Atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y a las características del puesto de trabajo, la negociación colectiva establecerá requisitos dirigidos a prevenir la utilización abusiva de contratos de duración determinada con distintos trabajadores para desempeñar el mismo puesto de trabajo cubierto anteriormente con contratos de ese carácter, con o sin solución de continuidad, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo temporal. Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la utilización de los contratos formativos, de relevo e interinidad".

Pues bien, de una parte, el segundo contrato suscrito, como recuerda la parte impugnante del recurso, lo fue en 5-7-2010, cuando ya estaba vigente la nueva redacción del artículo 15.5 ET a que se refiere la recurrente- y duró más de tres

años (en concreto, tres años, cinco meses y veintiséis días, hasta el 31-12-2013, en definitiva, casi 42 meses); e incluso descontando el período de suspensión de dicho precepto, conforme a la Ley 3/2012, entre el 31-8-2011 y el 31-12-12 (17 meses), se superaría el umbral de los 24 mensualidades dentro de un período de 30 meses, siendo de considerar que, en todo caso, debería de añadirse el tiempo de la anterior contratación. Y en relación con lo que se pretende como segundo contrato, en cuando suscrito cuando ya regía la limitación temporal del artículo 15,1 ET, de nuevo se superaba el plazo de tres años.

Pero, indudablemente, añadido a ello, si se considera que, en realidad, todo ha sido una misma relación laboral, bajo apariencia formal de dos o más contratos temporales distintos, para prestar el mismo trabajo en el mismo Área del Ayuntamiento demandado, desligado ello de una actividad que realmente sea temporal, resulta la consecuencia del artículo 15,3 del citado Estatuto laboral, de que se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales suscritos en fraude de ley, con reconocimiento de todo el tiempo trabajado sin discontinuidad sensible, a todos los efectos de antigüedad. Y lo habrían sido, en esa perspectiva, ya desde el primero de ellos, por lo que no cabría luego pretender su terminación y la nueva suscripción de posteriores contratos temporales (de nuevo en fraude de ley), en cuanto que ya la relación laboral había devenido en indefinida, lo que es irrenunciable (artículo 3.5 ET). Pues debe tomarse en consideración que, como se señala por la jurisprudencia (STS de 25-5-2015 entre las últimas), inalterados los hechos (en el caso, ni tan siquiera cuestionados en el recurso), la apreciación del fraude debe de mantenerse al ser la misma "facultad primordial del órgano judicial de instancia".

Debe además destacarse también que, se viene señalando por la doctrina jurisprudencial unificada, de entre las que es ejemplo la reciente STS de 22-4-15, que:

"Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de la utilización de la modalidad contractual de obra o servicio determinado por parte de las Administraciones Públicas y lo ha hecho en la sentencia de 21 de marzo de 2002, recurso 1701/2002, en la que se contiene el siguiente razonamiento:

QUINTO.- Por otra parte, es cierto que esta Sala ha matizado la doctrina expuesta en el anterior fundamento cuando es la Administración Pública la que acude a la contratación temporal causal, en atención a las peculiaridades que le son propias; entre ellas, la posibilidad de acometer la ejecución de obras o servicios determinados con dotaciones presupuestarias ajenas, limitadas en el tiempo y variables. Pues esa circunstancia constituye un factor que puede no es neutro, a la hora de valorar si la obra o servicio tiene o no sustantividad propia y autonomía dentro de lo que constituye su actividad laboral normal y si su ejecución esta limitada en el tiempo. 11 Pero también en esas ocasiones, la Sala ha señalado expresamente --sentencias de 10-12-96 (rec.

2429/1996), 30-12-96 (rec. 637/1996), 3-2-99 (rec. 818/1997) y 21-9-99 (rec. 341/1999) dictadas en controversias que afectaban a trabajadores contratados por un Ente Público-- que "el válido acogimiento a la modalidad contractual que autoriza el artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores no sólo requiere que la obra o servicio que constituya su objeto sea de duración incierta, y presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad normal de la empresa, sino además que, al ser concertado, sea suficientemente identificada la obra o el servicio". Es evidente pues que, de acuerdo con la doctrina unificada, las Administraciones Públicas no quedan exoneradas del cumplimiento de esa exigencia legal, puesto que deben "someterse a la legislación laboral cuando, actuando como empresarios (artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores), celebren y queden vinculadas con sus trabajadores por medio del contrato de trabajo, que habrá de regirse en su nacimiento y en su desarrollo ajustadamente a la normativa laboral que le sea aplicable según las circunstancias concurrentes en cada caso. Así lo impone el artículo 35.1 del Real Decreto 364/95 de 10 de Marzo, Reglamento General de Ingreso del personal al Servicio de la Administración General del Estado. Y negar tal sometimiento, iría en contra del claro mandato del artículo 9.1 de la Constitución, que sujeta no sólo a los ciudadanos, sino también a los poderes públicos, a la propia Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En definitiva, no es posible a las Administraciones Públicas eludir el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y las demás normas reguladoras del contrato de trabajo temporal y sus limitaciones como fuentes reguladoras y generadoras de derechos y obligaciones" (S. 5-7-99, rec. 2958/1998)".

CUARTO.- Por tanto, en el caso que ahora se analiza, y se da así respuesta también al segundo motivo del recurso formalizado, se realiza una contratación temporal en la que no se identifica suficientemente cual es la obra o servicio determinado con sustantividad suficiente que sirve de excusa causal a la misma; en todo caso, se realiza en la práctica por la trabajadora demandante una actividad normal y habitual, desligada de la existencia de alguna peculiaridad funcional ni presupuestaria, y además, como ya se ha señalado, se exceden también los plazos máximos de contratación temporal para obra o servicio acogida al artículo 15,1,a) ET. A lo que además, debe de añadirse, y se da así respuesta a algo alegado en la impugnación del recurso, conforme a la Ley de Bases de Régimen local, artículo 25,2,k, es competencia de los Ayuntamientos, si bien sea en los términos en que se pueda establecer por leyes generales o autonómicas, la "prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social". Al margen de que ello se pueda prestar en el marco de programas diversos, que pueden venir concertados con otras entidades locales -con otros Ayuntamientos, en Mancomunidades de municipios, con Diputaciones o con la propia Comunidad Autónoma-, pero que no

pueden condicionar por ello la pretensión de darle naturaleza temporal a una actividad propia y normal del ente local. Ello, además, sin entrar en cual sea el órgano competente para acordar la decisión extintiva (artículo 126,1 LBRL). Por último, y añadido a todo ello, y pese a su guadianesca vigencia temporal (artículo 1,2 de la Ley 35/2010, art.17 del RDL 3/2012 y RDL 10/2011), no debe tampoco olvidarse la finalidad pretendida por el artículo 15.5 del mencionado Estatuto de los Trabajadores, de limitar el abuso en la contratación temporal sucesiva, y su reconversión en una relación laboral indefinida, como una de las medidas adoptables en aplicación de la Directiva 1999/70, sobre el trabajo de duración determinada, para "evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada", que es la finalidad que el precepto estatutario viene a intentar conseguir, con lo que se da respuesta a la segunda alegación contenida en el primer motivo del recurso. Relación indefinida que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada, exige una causalidad adecuada para poder acordar, por órgano competente para ello, y mediante procedimiento reglado, su extinción, de conformidad con el artículo 52,c) ET (STS de 16-9-13, entre otras varias). Y por ende, que tampoco se ha infringido el artículo 53 ET, como se plantea en el segundo motivo del recurso, en cuanto que la existencia de una relación laboral indefinida impide la extinción contractual pretendiendo acogerse a su temporalidad, y solamente cabría hacerlo, o bien por motivo disciplinario, o bien por causa objetiva, debidamente acreditada, y cumpliendo con las exigencias formales esenciales contempladas al efecto, precisamente contenidas en ese artículo 53 ET.

En definitiva, que entiende esta Sala que la juzgadora de instancia no ha incurrido ni en su argumentación ni en su decisión, en ninguna infracción normativa, y ha aplicado de modo correcto, atendiendo a las peculiaridades que derivan del carácter de empleada pública laboral de la demandante, las consecuencias a ello atemperadas, conforme a doctrina jurisprudencial unificada que tiene como referente el artículo 103,3 del texto constitucional. Y en su consecuencia, tras declarar la relación laboral como indefinida, no como fija de plantilla, y la decisión extintiva como un despido Improcedente, aplica las consecuencias generales que son tenidas como las adecuadas por, a la fecha, jurisprudencia unificada claramente consolidada (STS de 21-1-2014 y siguientes), conforme al artículo 56 ET, en la redacción aplicable tras las últimas reformas laborales, lo que debe de ser así íntegramente confirmado, tras la desestimación del recurso formalizado en su contra.

QUINTO.- De conformidad con lo que viene establecido en el artículo 235,1 de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de 10-10-11, procede acordar la expresa imposición de condena en las Costas del recurso a la Administración recurrente

vencida en el mismo (STS 18-5-94), en cuanto que actúa como empleadora (STS de 22-6-93, 30-6-93, 19-10-93 o 26-11-93, por todas), que deben comprender el pago de la Minuta de Honorarios del Letrado de la parte impugnante, en la cuantía que esta Sala, prudencialmente, y dentro de los límites legales, señalará en la parte dispositiva de esta resolución judicial.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que con desestimación del recurso formalizado por parte de la representación letrada de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA contra la Sentencia de fecha 22-1-2015 del Juzgado de lo Social de Cuenca, dictada en los autos 152/2014, recaída resolviendo de modo estimatorio la Demanda sobre Despido interpuesta por la trabajadora , procede su íntegra confirmación, con condena en Costas a la empleadora pública recurrente vencida en el mismo, comprensivas de la Minuta de Honorarios del Letrado de la parte impugnante, en cuantía de 400 (CUATROCIENTOS) euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe **RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA**, que se preparará por escrito dirigido a esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Albacete, dentro de los **DIEZ DIAS** siguientes a su notificación. Durante dicho plazo, las partes, el Ministerio Fiscal o el letrado designado a tal fin, tendrán a su disposición en la oficina judicial los autos para su examen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley reguladora de la jurisdicción social. La **consignación del importe de la condena**, cuando proceda, deberá acreditarse por la parte recurrente, que no goce del beneficio de justicia gratuita, ante esta Sala al tiempo de preparar el Recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la **Cuenta Corriente número ES55 0049 3569 9200 0500 1274** que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, tiene abierta en la Oficina del BANCO SANTANDER sita en esta ciudad, C/ Marqués de Molins nº 13, indicando: 1) Nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y, si es posible, el NIF/CIF; 2) Beneficiario: SALA DE LO SOCIAL; y 3) Concepto (la cuenta del expediente): 0044 0000 66 0581 15; pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista. Debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador, causahabiente suyo, o beneficiario del régimen



público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como **depósito** la cantidad de **SEISCIENTOS EUROS (600,00 €)**, conforme al artículo 229 de la citada Ley, que deberá ingresar en la Cuenta Corriente anteriormente indicada, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo de haberlo efectuado en la Secretaría de esta Sala al tiempo de preparar el Recurso.

Expídanse las certificaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal el día veintidos de septiembre de dos mil quince. Doy fe.